

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



Consorcio Urbanístico
Área Tecnológica del Sur
de Getafe (Madrid)

D^a MARÍA DEL CARMEN GARCÍA MUÑOZ, SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO URBANÍSTICO “ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR”, TECNOGETAFE DE GETAFE (MADRID)

CERTIFICO:

Que el Consejo de Administración del Consorcio Urbanístico “Área Tecnológica del Sur” de Getafe (Madrid), en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2024, adoptó, entre otros, un acuerdo del siguiente tenor literal:

“SEXTO.- PROPUESTA RAZONADA DE ACUERDO DE APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS, EL GASTO Y EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN FACULTATIVA Y SUPERVISIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA URBANIZACIÓN DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO – TECNOGETAFE. EXPEDIENTE CS/01/2024.

1. OBJETO:

Es objeto de la presente propuesta la justificación de la legalidad y oportunidad de la emisión por el consejo de administración del Consorcio Urbanístico Área Tecnológica del Sur, de un acuerdo mediante el que se aprueben el pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares, el expediente de contratación y la autorización del gasto y se disponga la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de servicios de dirección facultativa y supervisión del control de calidad de las obras de reparación y terminación de la urbanización del parque científico y tecnológico Tecnogetafe, expediente CS/01/2024, conforme a lo dispuesto en los artículos 117.1, 122.1 y 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

2. ANTECEDENTES

I.) El consorcio urbanístico denominado Área Tecnológica del Sur fue constituido el día 10 de octubre de 2001 mediante el otorgamiento de escritura pública ante el Notario de Madrid don Juan Jorí Cardona al nº 567 de su protocolo, con la misión de desarrollar, gestionar y ejecutar de forma cooperativa entre el Ayuntamiento de Getafe y la Administración de la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.2.a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, el planeamiento urbanístico de los terrenos localizados al sur del término municipal de Getafe (Madrid) situados en los ámbitos denominados “Parque Equipado Getafe Sur del PAU Arroyo Culebro” y “Sector Parque Empresarial La Carpetania Segunda Fase” en el plan general de ordenación urbana de Getafe, a fin de implantar un parque científico y tecnológico denominado Tecnogetafe.

El consorcio ostenta la condición de entidad de derecho público integrante del sector público institucional dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el

cumplimiento de sus fines, de las previstas en el artículo 2.2.a) de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y goza de la consideración de Administración pública conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del mismo artículo. Está constituido por el Ayuntamiento de Getafe y la Administración de la Comunidad de Madrid, a la que está adscrito.

Conforme al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC 2010) establecido en el Reglamento (UE) nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, el consorcio constituye una unidad institucional residente a título de productor, no de mercado controlado por las Administraciones públicas, y ajeno a los fondos de la Seguridad Social, que está encuadrada en el sector institucional Administraciones públicas (S.13), subsector Administración regional (S.1312). A efectos de contratación pública, el consorcio tiene la consideración de poder adjudicador en la categoría de Administración pública conforme a lo dispuesto en los apartados 1.d), 2.b) y 3.a) del artículo 3 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Los estatutos del consorcio fueron aprobados al tiempo de su constitución y posteriormente modificados sucesivamente mediante el otorgamiento el día 13 de diciembre de 2006 de escritura pública ante el Notario de Madrid, don Antonio Pérez-Coca Crespo al nº 3.485 de su protocolo, el otorgamiento el día 16 de junio de 2008 de escritura pública ante el Notario de Madrid, don Francisco Marcos Díaz al nº 4.020 de su protocolo, el acuerdo del consejo de administración de 23 de diciembre de 2011, ratificado por el Ayuntamiento de Getafe el día 12 de junio de 2012 y la Comunidad de Madrid el día 20 de septiembre de 2012, y el acuerdo del consejo de administración de 16 de diciembre de 2019, ratificado por el ayuntamiento el día 22 de diciembre de 2020 y la comunidad autónoma el día 10 de febrero de 2021. Los estatutos vigentes fueron publicados en el diario oficial Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 46, de 24 de febrero de 2021.

Los fines que tiene atribuidos el consorcio conforme al apartado 1 del artículo 5 de los estatutos, son programar las necesidades de uso, las áreas de actuación y las formas de promoción del ámbito territorial de su competencia y gestionar unificadamente el desarrollo urbanístico de dicho ámbito en colaboración con las Administraciones competentes. Para el cumplimiento de estos fines, el consorcio ha de desarrollar las funciones previstas en el apartado 2 del mismo artículo 5 de los estatutos, entre las que se encuentran gestionar y ejecutar el planeamiento y llevar a cabo las obras de urbanización precisas en las áreas que tiene afectas conforme al destino previsto en los planes urbanísticos, tal como se dispone en los apartados c) y e).

II.) La ordenación urbanística pormenorizada del ámbito territorial de actuación del consorcio está constituida por el plan especial del parque equipado Getafe Sur del programa de actuación urbanística Arroyo Culebro, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Getafe el día 27 de mayo de 2002 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 180, de 31 julio de 2002) y modificado por el Pleno municipal los días 3 de junio de 2004 (diario oficial número 166, de 14 de julio de 2004), 15 de septiembre de 2006 (número 260, de 1 de noviembre de 2006), 6 de marzo de 2013 (número 97, de 25 de abril de 2013) y 6 de julio de 2016 (número 202, de 24 de agosto de 2016).

El proyecto de urbanización del ámbito territorial original del plan especial fue aprobado por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe el día 26 de junio de 2003 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 167, de 16 julio de 2003) y modificado por el Pleno municipal el día 20 de mayo de 2010 (diario oficial número 152, del 28 de junio de 2010). El vigente proyecto de urbanización interior del Área Tecnológica Madrid Sur fue aprobado por la Junta de Gobierno municipal el día 5 de julio de 2011 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 211, de 6 de septiembre de 2011).

Con la finalidad de proceder a la completa terminación de las obras de urbanización interior del Área Tecnológica Madrid Sur en orden a su recepción urbanística municipal conforme al artículo 135 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, el día 18 de marzo de 2024 el consejo de administración aprobó los proyectos constructivos denominados «Actualización del proyecto de urbanización interior del parque científico tecnológico Tecnogetafe, Getafe (Madrid)» y «Proyecto de reparaciones del parque científico tecnológico Tecnogetafe, Getafe (Madrid), reparaciones urbanización; actualización», redactados con fecha del mes de octubre de 2023 por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Alfonso Cariñena Toro y supervisados el día 23 de noviembre de 2023, e igualmente dispuso la incoación de un procedimiento de contratación para la ejecución simultánea de las obras definidas en los mismos, dando lugar al procedimiento CO/01/2024.

El día 18 de abril de 2024 la Unidad de Proyectos y Obras de Infraestructuras del Ayuntamiento de Getafe comunicó al consorcio que el primero de los proyectos mencionados habría de cambiar su denominación por la de «Modificación del proyecto de urbanización interior aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta de Gobierno el 5 de julio de 2011, Parque Científico y Tecnológico Tecnogetafe, Getafe (Madrid)». El día 26 de junio de 2024, la Junta de Gobierno municipal acordó aprobar inicialmente con esta denominación el proyecto y someterlo a información pública (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 167, de 15 de julio de 2024), situación en la que se encuentra en la actualidad.

III.) La ejecución de las obras por cuenta del consorcio requiere no solo contratar un constructor que las ejecute, sino también comprobar y vigilar en todo caso su correcta realización mediante el ejercicio de las potestades que se atribuyen en la normativa de contratación pública al denominado «facultativo de la Administración director de la obra» (cláusula 4, párrafo 1º, del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado aprobado mediante Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre). Adicionalmente, dado que la contratación de las obras prevé que el propio constructor lleve a cabo el control de calidad de los trabajos, se hace necesario supervisar la efectiva realización por su parte del adecuado control de calidad. Finalmente, dado que la contratación de las obras permite que el constructor pueda subcontratar, si se diese ese caso sería necesario designar un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra y supervisar el correcto cumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos laborales por parte de ese coordinador, ya que su designación sería de la responsabilidad del consorcio en la condición que tiene de promotor de las obras conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales.

Para satisfacer estas necesidades de asistencia técnica para el control de la correcta ejecución de las obras de reparación y terminación de la urbanización del parque científico y tecnológico Tecnogetafe, el día 18 de marzo de 2024, el consejo de administración dispuso la incoación del procedimiento CS/01/2024, de contratación de los servicios de dirección facultativa y supervisión del control de calidad de las obras de ejecución de los proyectos constructivos mencionados, a título de contrato complementario respecto de la contratación de las obras, a la que corresponde el expediente CO/01/2024.

El día 30 de mayo de 2024, la directora-gerente, en cumplimiento de un mandato expreso del consejo de administración al tiempo de incoación del procedimiento, solicitó de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, conforme al convenio de asistencia jurídica de 25 de abril de 2024 con vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2024, la emisión de informe a una propuesta de pliego de cláusulas administrativas particulares de la contratación que había sido elaborado, conforme a lo regulado en el artículo 122 de la Ley de Contratos del Sector Público, en colaboración con los servicios técnicos de la Subdirección General de Consorcios Urbanísticos de la Dirección General de Suelo de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.

El día 11 de julio de 2024, el Letrado de la Comunidad de Madrid encargado del caso, junto con la Subdirectora General de Asistencia Jurídica Convencional, Asuntos Constitucionales y Estudios de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid y el Letrado Jefe de la misma, emitieron informe favorable A.J.C. 94/2024, si bien condicionando el sentido del mismo a la observancia de cinco consideraciones de carácter esencial y poniendo de relieve varias observaciones adicionales de mejora tanto del pliego como de la documentación justificativa del procedimiento. En consecuencia, se ha modificado en lo pertinente la redacción de las propuestas iniciales para incorporar al pliego definitivo de cláusulas administrativas particulares las adaptaciones requeridas por las consideraciones esenciales del informe jurídico y la mayor parte de las observaciones de mejora puestas de relieve en el mismo, en los términos que se explican más adelante.

3. DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE:

El análisis del expediente de contratación muestra que la tramitación del procedimiento se ha desarrollado conforme a la ley, lo que permite pasar a la fase de adjudicación del contrato mediante la convocatoria de la correspondiente licitación. La única incidencia especial ha sido la emisión a solicitud de la directora-gerente de un informe facultativo de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid sobre los términos de la adaptación del pliego al informe preceptivo. Obran por tanto en el expediente de contratación los siguientes documentos:

- Memoria explicativa de la necesidad e idoneidad de la contratación y otros aspectos de oportunidad del procedimiento, emitida por la directora-gerente del consorcio el día 12 de marzo de 2024 con objeto de justificar la legalidad y oportunidad de la incoación del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 73.2 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en relación con el artículo 116.4 de la Ley de Contratos del Sector Público.

- Certificación de la secretaria del consejo de administración acreditativa del acuerdo del consejo de administración de 18 de marzo de 2024 por el que se acuerda la incoación del procedimiento de contratación y la remisión del expediente a informe jurídico de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, conforme a lo dispuesto en los artículos 116.1 de la ley y 73.1 del reglamento.
- Informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid A.J.C. 94/2024 sobre la propuesta de pliego de cláusulas administrativas particulares de la contratación, emitido por el Letrado de la Comunidad de Madrid don Tomás Navalpotro Ballesteros, el Letrado Jefe de la Subdirección General de Asistencia Jurídica Convencional, Asuntos Constitucionales y Estudios de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid don Francisco Bravo Virumbrales y la Subdirectora General doña María Victoria López Torralba el día 11 de julio de 2024, documento preceptivo por aplicación supletoria del artículo 122.7 de la ley.
- Solicitud razonada de informe jurídico facultativo acerca de la adaptación al informe preceptivo A.J.C. 94/2024 del pliego de cláusulas administrativas particulares de la contratación, emitida por la directora-gerente del consorcio el día 12 de agosto de 2024 con objeto de justificar la conveniencia de emitir segundo informe jurídico al haberse incluido en el pliego resultante importantes cambios en la definición de las prestaciones contractuales y de las modificaciones del contrato.
- Informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid A.J.C. 124/2024 sobre la propuesta de pliego de cláusulas administrativas particulares de la contratación adaptada al informe preceptivo 94/2024, emitido por el mismo Letrado emisor de este, don Tomás Navalpotro Ballesteros, y los Letrados Jefes de la Subdirección General de Asistencia Jurídica Convencional, Asuntos Constitucionales y Estudios de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid don Fernando Luque Regueiro y doña María Victoria López Torralba el día 20 de septiembre de 2024.
- Certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a los compromisos económicos del consorcio por razón del contrato de referencia, por importe máximo de 82.496,49 € (I.V.A. incluido), emitido por la directora-gerente del consorcio el día 25 de septiembre de 2024, conforme a lo dispuesto en el artículo 116.3 de la ley.
- Propuesta de pliego de cláusulas administrativas particulares de la contratación adaptado a los informes de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid A.J.C. 94/2024 y 124/2024, que se somete a la aprobación del consejo de administración, firmado a efectos identificativos por la directora-gerente del consorcio el día 25 de septiembre de 2024.
- Propuesta de pliego de prescripciones técnicas particulares de la ejecución del contrato que se somete a la aprobación del consejo de administración, firmado a efectos identificativos por la directora-gerente del consorcio el día 1 de octubre de 2024; este pliego coincide con el firmado para incoación de la contratación el día 13 de marzo de 2024, pues no

ha sido preciso modificarlo a resultas de los informes de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, si bien se han rectificado algunos errores formales de concordancia interna.

4. ADAPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN A LOS INFORMES JURÍDICOS PRECEPTIVO Y FACULTATIVO:

En el informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid A.J.C. 94/2024 sobre la propuesta de pliego de cláusulas administrativas particulares de la contratación, preceptivo por aplicación de lo dispuesto en el artículo 122.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, se pusieron de manifiesto hasta cinco consideraciones esenciales a las que se condicionaba el sentido favorable del informe, junto con varias observaciones de mejora a estimar en su caso. Además, en el curso del proceso de adaptación del pliego a este informe se advirtió que la modificación de la configuración contractual de algunas prestaciones eventuales sobre las que pesaban consideraciones de carácter esencial, obligaba a modificar de forma importante aspectos nucleares como la definición de las prestaciones contractuales básicas o la previsión de modificaciones del contrato conforme al artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público. Por este motivo, la directora-gerente del consorcio solicitó de la Abogacía General un segundo informe jurídico, esta vez facultativo conforme a lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Ley 3/1999, de 30 marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, con la finalidad de depurar el pliego definitivo de eventuales errores. En respuesta, la Abogacía General emitió el informe A.J.C. 124/2024 informando favorablemente la segunda versión del pliego de cláusulas administrativas particulares de la contratación e incluyendo varias observaciones de mejora a estimar en su caso, de las cuales algunas incidían sobre aspectos ya tratados en el informe A.J.C. 94/2024 y otras planteaban cuestiones nuevas.

Todas las consideraciones esenciales del informe preceptivo han sido atendidas, en los términos que se expresa a continuación, si bien de las observaciones de mejora puestas de relieve en los informes se ha atendido a la mayor parte, pero no a todas, por los motivos que para cada caso se explican más adelante. Asimismo, se incluye explicación de la inclusión de oficio en el pliego de una observación de mejora puesta de relieve en el informe jurídico A.J.C. 91/2024, relativo al pliego del contrato principal de obras CO/01/2024, que se ha entendido aplicable a este contrato complementario de servicios, así como del tratamiento de las modificaciones contractuales.

I.) Las cinco consideraciones de carácter esencial del informe A.J.C. 94/2024 fueron las siguientes:

- Primera. La configuración contractual de la tarea de supervisar el correcto cumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos laborales por parte del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de las obras del contrato principal CO/01/2024 (apartado 1 de la cláusula 1 del pliego), tarea cuya realización se condicionaba a la decisión de subcontratar que eventualmente pudiera tomar el constructor, implicaría que el objeto del contrato no estuviese suficientemente determinado conforme a la ley: *«La inclusión en el objeto contractual de una prestación sobre la que no existe certeza en cuanto a la obligación de ejecutarla parece situarse de espaldas al referido deber de proceder a su exacta concreción en los pliegos de cláusulas*

administrativas particulares. Asimismo, impide a las empresas interesadas en tomar parte en la licitación realizar un cálculo o previsión adecuada con vistas a la presentación de sus ofertas. Igualmente, desde el punto de vista de la eficiencia en la contratación (art. 28 LCSP), puede implicar la previsión en el presupuesto del contrato de unos costes innecesarios, en el caso de no llegarse a exigir la realización de la prestación (en este caso, como más adelante se verá, el presupuesto está fijado a tanto alzado, es decir, no será susceptible de variación una vez que, aceptadas las ofertas presentadas por los licitadores, se proceda a la adjudicación del contrato). / ... no se contiene regulación alguna del alcance de dicha obligación en la documentación contractual y, en particular, en el PPT. / De esta forma, el PCAP, atendida la naturaleza del contrato, deberá definir las concretas prestaciones a cuya ejecución resultará obligado el contratista, eliminando toda sombra de incertidumbre sobre el alcance de sus obligaciones. / Esta consideración tiene carácter esencial.» (págs. 10 y 11, A.J.C. 94/2024).

- La propuesta inicial de pliego configuraba la mencionada tarea del director facultativo de supervisar el correcto cumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos laborales por parte del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de las obras del contrato principal, como una obligación eventual que podría ser exigible o no en función de las circunstancias, pero sin incluir ningún tipo de retribución por su realización. Este diseño suponía introducir en un contrato sinalagmático en el que la equivalencia de las prestaciones y el equilibrio financiero durante la ejecución constituyen rasgos esenciales, un elemento de aleatoriedad que va más allá del principio de riesgo y ventura, lo que, a la vista del luminoso informe de la Abogacía General, es evidente que pugna conceptualmente con el principio de determinación del objeto contractual, aun cuando su relevancia económica real sea limitada.

La cuestión a la que el pliego inicial pretendía dar respuesta proviene de la circunstancia de que la normativa de prevención de riesgos laborales que resulta específicamente aplicable por su especial peligrosidad a determinadas obras de construcción entre las que se incluyen las de reparación y terminación de la urbanización del parque científico y tecnológico Tecnogetafe que son objeto de la contratación principal CO/01/2024, atribuye al promotor de las obras, es decir, al consorcio, la responsabilidad específica de designar un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, pero solamente en los casos de que intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos (artículo 3.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción), lo que en definitiva remite a la decisión de subcontratar o no que pueda eventualmente adoptar conforme a sus propios intereses el constructor que resulte adjudicatario de las obras del contrato principal.

Dado que los proyectos constructivos aprobados por el órgano de contratación ya contienen el preceptivo estudio de seguridad y salud a que se refieren los

artículos 4.1 y 5 de la referida fuente normativa, cabe concluir que, en defecto de subcontratación por parte del constructor de las obras, las obligaciones legales de prevención de riesgos laborales del consorcio podrían llevarse a efecto a través de la dirección facultativa sin ningún otro complemento, ya que bastaría con que emitiera el informe preceptivo al plan de seguridad y salud en el trabajo previo a la aprobación por el órgano de contratación (artículos 7.2 y 9.c), adoptase las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a las obras (artículo 9.f) y llevara el libro de incidencias para el control y seguimiento del plan de seguridad y salud (artículo 13).

Sin embargo, si el constructor decidiera subcontratar, el consorcio adquiriría la obligación legal de designar a un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra para la realización de las amplias funciones preventivas y de coordinación de actividades empresariales que se mencionan en los restantes epígrafes del artículo 9 del Real Decreto 1627/1997, de cuya efectiva realización sería entonces responsable el consorcio en la condición legal que tiene de promotor de las obras. Esta adquisición de obligaciones legales para el promotor por la voluntad y según los exclusivos intereses del constructor, motiva que en el diseño de la contratación de las obras que constituyen el objeto del contrato principal CO/01/2024 se haya previsto que, en caso de subcontratación, el contratista facilite el cumplimiento por parte del consorcio de sus nuevas obligaciones resultantes de la subcontratación, para lo que ha de proponer una terna de técnicos competentes con la finalidad de que, de entre ellos, la dirección facultativa designe a la persona que, a expensas del constructor y bajo la supervisión del director de obra, se integre conforme a la ley en la dirección facultativa para desempeñar las funciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de las obras del contrato principal, de cuyo correcto ejercicio ha de responder legalmente el consorcio.

Como complemento de ese diseño, se incluyó entre las prestaciones contractuales de la dirección facultativa la tarea de supervisar el correcto cumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos laborales por parte de ese coordinador ajeno al consorcio y pagado por el constructor, configurándola como una prestación eventual sin coste debido a que, en el caso de que el consorcio se vea en la obligación de designar coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el contratista de la dirección facultativa sufrirá la carga de integrar a dicha persona en la dirección facultativa conforme a la ley y asumirá la prestación adicional de supervisar la actuación del coordinador, pero se ahorrará los costes en que no haya incurrido respecto de algunas tareas en materia de prevención de riesgos laborales que son propias de la dirección facultativa y que asume el coordinador a partir de su designación (epígrafes c y f del artículo 9 y artículo 13 del Real Decreto 1627/1997).

- A la vista del informe A.J.C. 94/2024, y considerando que los supuestos de que

en la ejecución de una obra peligrosa intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, son relativamente frecuentes en el tráfico, inciden sobre el contrato de servicios alterando su equilibrio financiero y acaecen con independencia de la voluntad de las partes en el presente contrato (director facultativo y consorcio), esta consideración de carácter esencial se ha atendido limitando en el pliego definitivo el objeto contractual a aquellas prestaciones que resulten necesarias en cualesquiera circunstancias (incluyendo entre ellas las que corresponden a la dirección facultativa en defecto de coordinador), y configurando como un supuesto de modificación contractual prevista en el pliego de la contratación, conforme al artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, la eventualidad de que el consorcio deba hacer frente a la responsabilidad de designar un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra y consiguientemente deba asegurarse, de forma idónea a través del director de obra, el correcto cumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos laborales por parte de ese coordinador.

Esta solución obliga a su vez a incluir en el valor estimado del contrato el valor de la modificación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101.2.c) de la Ley de Contratos del Sector Público, y a variar las referencias de valor estimado que se emplean para la determinación de criterios de solvencia (apartados 7.A.1 y 2 y 7.B.1 de la cláusula 1 del pliego).

- Segunda. No se había incluido en el pliego el valor estimado completo del contrato porque se omitía el coste de la prórroga prevista para el caso de que el contratista de las obras CO/01/2024 hubiera ofertado ampliar el plazo de garantía de su contrato (apartado 4 de la cláusula 1 del pliego), coste requerido conforme a la ley: *«En cuanto al valor estimado del contrato, conviene advertir sobre una confusión en que, a juicio de esta Abogacía General, incurre el pliego. En la cláusula 1.4 del proyecto de PCAP, en las páginas 12 a 17 de dicho documento, se recogen una serie de alusiones al «valor estimado del contrato» que, en realidad, vienen referidas a elementos componentes del presupuesto base [de licitación] del contrato. Fruto de esa confusión (en parte sugerida por el propio legislador, al mezclar el tratamiento de esos tipos de gasto en los artículos 100 y 101 de la LCSP), no se hace referencia alguna a las posibles prórrogas y modificaciones del contrato, que deben estar incluidas, en caso de que estén previstas, en dicho valor estimado conforme a lo previsto en el artículo 101.2 de la LCSP. Al respecto, en el caso que concita nuestra atención resulta razonable que no se contemplen las modificaciones, toda vez que no se prevén causas de modificación específicamente aplicables al contrato (cláusula 1.22), pero no las prórrogas, contempladas en la cláusula 1.18. / Dicho aspecto debe ser corregido en la versión definitiva del PCAP, en la que, además, y conforme a lo exigido por el artículo 101.5, deberá indicarse de forma expresa la toma en consideración de la prórroga en el cálculo del valor estimado del contrato. / La anterior consideración tiene carácter esencial»* (págs. 18 y 19, A.J.C. 94/2024).

- La propuesta inicial de pliego, ante la posibilidad de que el plazo de garantía del contrato principal de ejecución de las obras CO/01/2024 fuese superior al común de un año, ya que su pliego regulador incluye entre los criterios objetivos de adjudicación cualitativos la evaluación automática del compromiso del licitador de ampliar ese plazo de garantía, previó que el presente contrato complementario de dirección facultativa de las obras se prorrogara en tal caso automáticamente por el tiempo correlativo necesario para emitir la liquidación del contrato de obras al término de su plazo de garantía ampliado.
- Esta consideración de carácter esencial se ha atendido, a la vista de las explicaciones sobre el objeto contractual contenidas en el informe A.J.C. 94/2024, considerando que este supuesto no tiene realmente el carácter de prórroga contractual con que se había configurado en el pliego inicial, sino que más bien es muy similar al anterior supuesto de supervisión eventual de las tareas del coordinador de seguridad y salud en cuanto que prestación adicional que altera moderadamente el equilibrio financiero del contrato y acaece con independencia de la voluntad tanto del director facultativo, cuanto del consorcio, por lo que se ha configurado el supuesto en el pliego definitivo igualmente como modificación contractual prevista en el pliego de la contratación, conforme al artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público. Dado que conforme al artículo 101.2.c) de la Ley de Contratos del Sector Público el valor estimado del contrato ha de tener en cuenta la totalidad de las modificaciones al alza previstas, se ha incluido el coste de la modificación en el desglose de valor estimado del contrato y así se ha advertido en el pliego definitivo.

Esta solución obliga a su vez a variar las referencias al importe concreto del valor estimado del contrato que se emplean para la determinación de criterios de solvencia (apartados 7.A.1 y 2 y 7.B.1 de la cláusula 1 del pliego).

- Tercera. El pliego incurría en contradicción entre la dedicación exigida al director de obra a título de medios personales adscritos a la ejecución del contrato (apartado 7.C de la cláusula 1) y la valorable como criterio de adjudicación (apartado 9.2.A): *«En concreto, en el Pliego que es objeto del informe se han previsto tres criterios de adjudicación susceptibles de apreciación automática, consistentes en la formulación de un compromiso de dedicación adicional en cuanto a la jornada fijada como mínima obligatoria de determinados profesionales adscritos a la ejecución del contrato, en la experiencia igualmente complementaria a la exigida a título de solvencia técnica o profesional de dicho personal, así como en un compromiso de disponibilidad del licitador para emitir ciertos informes... / Por lo que se refiere al primer criterio de los relacionados, consistente en el compromiso de dedicación adicional en cuanto a la jornada fijada como mínima obligatoria de determinados profesionales adscritos a la ejecución del contrato, resulta imperativo salvar la contradicción entre la jornada fijada para el director de obra al principio de la página 21 (epígrafe relativo al compromiso de adscripción de determinados medios personales) y en el criterio de adjudicación que contempla la*

posibilidad de ofertar cierta jornada adicional (pág. 25). En aquel primer sitio se fija su dedicación mínima en tres días y, sin embargo, el criterio de adjudicación parte de una ocupación mínima de dos días a la semana. / Esta consideración tiene carácter esencial» (pág. 25, A.J.C. 94/2024).

- La propuesta inicial de pliego contenía un error de hecho al indicar, en el apartado referente a la asignación de puntuación por razón del criterio objetivo de adjudicación cualitativo evaluable automáticamente del compromiso del licitador de ampliar la dedicación del director de obra, que el mínimo de dedicación exigido para esta persona era de dos días por semana, cuando la dedicación mínima exigida como requisito de solvencia adicional es de tres días; el error salta a la vista porque si se aplica el baremo previsto sobre la referencia errónea, el resultado de la fórmula supera el máximo de puntuación asignado a este criterio de adjudicación.
 - Advertido el error en el A.J.C. 94/2024 como consideración de carácter esencial, se ha rectificado en el pliego definitivo.
- Cuarta. El pliego incluía como mejora valorable para la adjudicación del contrato un compromiso cuyo cumplimiento habría de tener lugar durante el año siguiente al término del plazo de garantía (apartado 9.2.C de la cláusula 1 del pliego), lo que implicaba situarlo fuera de la relación contractual y dejar su cumplimiento al albur del contratista: *«...debe revisarse el encaje temporal de la mejora durante la vida del contrato, pues no parece viable que la misma pueda ejecutarse ex post, “durante el año siguiente al término del plazo de garantía”, entre otras cuestiones, porque uno de los aspectos a los que están afectas y de los que responden las garantías es “De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación”, ex artículo 110.c) de la LCSP. Precisamente por ello, el artículo 209 de la LCSP dispone que los contratos se extinguen por cumplimiento o por resolución, en tanto que el artículo 210 añade que “El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación”; prestación de la que pasan a formar parte las mejoras por mor del artículo 145.7 in fine de la LCSP. Por ello, no puede existir recepción del contrato en tanto este no haya sido ejecutado en su integridad, incluyendo las eventuales mejoras, y será a partir de dicho plazo cuando empiece a computar el plazo de garantía. De lo contrario, si las mejoras no formasen parte del objeto contractual y se exigiesen tras la finalización del contrato, no solo no podrían hacerse efectivas a través de las garantías, sino que tampoco podría imponerse penalidad o consecuencia alguna ante su incumplimiento, de modo que su exigibilidad quedaría al albur del contratista, en clara contravención del artículo 1115 del Código Civil. / Esta consideración tiene carácter esencial» (pág. 28, A.J.C. 94/2024).* Tras la inicial adaptación del pliego a este informe preceptivo, en el informe facultativo se observa que *«parece que se sigue recogiendo la existencia de una obligación contractual, que surgiría de la asunción de la mejora mediante la oferta del licitador, y que se prestaría con posterioridad a la recepción del*

contrato objeto del presente informe y de su plazo de garantía» (págs. 12 a 14, A.J.C. 124/2024).

- La propuesta inicial de pliego incluía como criterio objetivo de adjudicación cualitativo evaluable automáticamente el compromiso del licitador para emitir sin coste adicional para el consorcio informes posteriores a la ejecución del contrato principal CO/01/2024 referentes a posibles patologías que pudieran sufrir las instalaciones, y para proporcionar la información y documentación sobre las obras que les pudiera requerir la directora-gerente en su condición de responsable del contrato. Dado que la justificación expresa de este criterio de valoración radica en que puede proporcionar al consorcio un conocimiento técnico específico sobre eventuales cambios en la infraestructura que pudieran ser requeridos a futuro, es lógico que el encaje temporal del compromiso se extienda más allá de la finalización del plazo de garantía de las obras, porque lo que se pretende con la mejora no es que la dirección facultativa realice las funciones que ya tiene de supervisar eventuales defectos y proponer correcciones durante el plazo de garantía de las obras (motivo por el cual la terminación del contrato de dirección facultativa tiene lugar en condiciones normales tras la liquidación del contrato principal de obras CO/01/2024, conforme se indica en el apartado 18 de la cláusula 1), sino que el efecto jurídico de este compromiso sea ampliar en un año el plazo de ejecución del contrato de dirección facultativa, durante el cual el contratista habrá de emitir los informes previstos, sin coste adicional y al servicio de los intereses del consorcio.
- Esta consideración de carácter esencial se atendió en el pliego adaptado al informe preceptivo precisando únicamente el ámbito temporal del compromiso, para lo que se indicó que se extiende al año siguiente a la terminación del plazo de garantía de las obras que son objeto del contrato principal CO/01/2024. Sin embargo, a la vista de la nueva observación contenida en el informe facultativo, se ha añadido un párrafo específico poniendo de relieve que el compromiso se integrará en el contrato en concepto de mejora con el efecto jurídico de ampliar en un año el plazo de ejecución, y se ha incluido además la misma precisión en la regulación del plazo de ejecución del contrato (apartado 18 de la cláusula 1).
- Quinta. La descripción del procedimiento de imposición de penalidades (apartado 21 de la cláusula 1 del pliego) parecía sugerir que se dejaba al mero arbitrio del órgano de contratación la resolución del contrato en caso de cualquier tipo de incumplimiento del contratista: *«Resulta necesario aclarar cuáles son esas causas de resolución (y los parámetros para su apreciación) a las que alude este extracto, toda vez que su literalidad sugiere la posibilidad de poner fin a la relación contractual por cualquier tipo de demora, incumplimiento parcial o incumplimiento de obligaciones no esenciales bajo el libre arbitrio del órgano de contratación, lo que supondría tanto una afección negativa al principio de seguridad jurídica, como un solapamiento respecto del régimen de*

penalidades establecido en el PCAP. / Esta consideración, igualmente puesta de manifiesto recientemente en el Informe AJC 91/2024, tiene carácter esencial» (pág. 31, A.J.C. 94/2024).

- La propuesta inicial de pliego regulaba el régimen de penalidades citando y recogiendo lo dispuesto en los artículos 192.2 y 193.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, que atribuyen a la Administración, en los supuestos de incumplimiento parcial de prestaciones contractuales o de demora respecto al cumplimiento del plazo total, la potestad de optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
- Esta consideración de carácter esencial se ha atendido suprimiendo la mención a la potestad de resolución del contrato en la versión definitiva del pliego, para satisfacer de este modo el principio de seguridad jurídica con el alcance indicado en los informes A.J.C. 91/2024 y A.J.C. 94/2024, no siendo realmente necesario incorporar al pliego la potestad administrativa de resolver el contrato en función de las circunstancias particulares de cada caso porque esa potestad trae causa directa de la ley.

II.) Las observaciones de mejora puestas de relieve en el informe A.J.C. 94/2024 que han sido incorporadas al pliego definitivo, son las siguientes:

- Eliminar todas las explicaciones relativas a la naturaleza jurídica del consorcio (apartado 1.I de la cláusula 1), al considerar que tal información debería incluirse exclusivamente, en puridad, dentro de la documentación preparatoria del contrato (págs. 4 y 14, A.J.C. 94/2024); se ha atendido suprimiendo dicho epígrafe, que ya consta con el mismo contenido en el acuerdo de incoación del procedimiento de contratación, y modificando la numeración de los posteriores subapartados.
- Ampliar la justificación de la inexistencia de lotes (apartado 1.V de la cláusula 1, actual apartado 1.IV), a la prestación eventual de supervisión del desempeño del coordinador en materia de seguridad y de salud (pág. 8, A.J.C. 94/2024); aun cuando, como se ha indicado, esta tarea se ha configurado en el pliego definitivo como modificación pactada, se ha atendido la observación modificando la justificación de la inexistencia de lotes para incluir en su seno las razones por las que se entiende inconveniente que esta prestación sea ejecutada por un contratista diferente.
- Determinar con mayor precisión, cuando se mencione al responsable del contrato, si se está haciendo referencia al responsable del contrato de obras principal, es decir, el director facultativo de la obra, o al responsable del contrato complementario de servicios de dirección de obra, esto es, la directora-gerente del consorcio (págs. 11 y 27, A.J.C. 94/2024); se ha atendido revisando la mención en los apartados 1.III (actual apartado 1.II) y 9.2.C de la cláusula 1.
- Modificar las referencias al importe concreto del valor estimado que se emplean para la determinación de criterios de solvencia (apartados 7.A.1 y 2 y 7.B.1 de la cláusula 1),

dada la necesidad legal de incluir en el cálculo del valor estimado el coste de prórrogas y modificaciones (págs. 20 y 21, A.J.C. 94/2024).

- Revisar las condiciones impuestas para la sustitución del personal adscrito a la ejecución del contrato (apartado 7.C de la cláusula 1) porque pudieran considerarse demasiado restrictivas, ya que podrían suponer la imposibilidad para el contratista de continuar ejecutando el contrato a pesar de que disponga y pueda adscribir a la ejecución a profesionales con el mismo nivel de titulación y experiencia requeridos, y podrían además afectar de forma indirecta a las expectativas profesionales del profesional que hubiese de ser sustituido, regulación que resulta además contradictoria con la flexibilidad con que el pliego permite la subcontratación (págs. 21 y 22, A.J.C. 94/2024). Esta observación se atendió en el pliego adaptado a este informe preceptivo incluyendo la reducción del alcance temporal de las restricciones al tiempo en que las obras estén en ejecución y ampliando los supuestos de sustitución con los sugeridos en el informe, al tiempo que se incluía en la memoria de la contratación una justificación ampliada del sentido y alcance de la restricción impuesta (*cf. infra IV, 2ª*). Sin embargo, en el posterior informe facultativo se sugiere la conveniencia de despejar dudas sobre la admisión de otras causas excepcionales equiparables a las mencionadas en el pliego y evitar la ambigüedad derivada de la exigencia de que la sustitución mantenga o mejore las características de la oferta que haya servido de base para la adjudicación del contrato (págs. 6 y 7, A.J.C. 124/2024). Por ello, se ha incluido además en el pliego definitivo la mención de causa excepcional equiparable y se han precisado los requisitos que ha de reunir el sustituto en todo caso, lo que permite suprimir la mención ambigua que advertía la Abogacía.
- Precisar el alcance de las prestaciones a que obliga la mejora de consultoría ex post prevista en el pliego como criterio objetivo de adjudicación cualitativo evaluable de forma automática (apartado 9.2.C de la cláusula 1), ya que no se concreta el contenido de la información y documentación que el contratista habrá de facilitar si asume el compromiso (pág. 27, A.J.C. 94/2024); se ha atendido suprimiendo en el pliego definitivo la obligación accesoria de proporcionar información y documentación sobre las obras y limitar el alcance del compromiso a la emisión de aquellos informes posteriores a la ejecución del contrato principal CO/01/2024 referentes a posibles patologías que pudieran sufrir las instalaciones que les pudiera requerir la directora-gerente en su condición de responsable del contrato, ya que esta obligación (que además engloba, como es lógico, proporcionar información y documentar las premisas del informe), siendo muy precisa, satisface la necesidad administrativa que justifica este criterio de valoración, cual es proporcionar al consorcio un conocimiento técnico específico sobre eventuales cambios en la infraestructura que pudieran ser requeridos a futuro.
- Matizar que las prestaciones objeto de la mejora de consultoría ex post (apartado 9.2.C de la cláusula 1) no se prestan “sin coste para el consorcio”, sino “sin coste adicional”, pues han de entenderse comprendidas en el precio fijado a tanto alzado que retribuirá al contratista por la correcta ejecución de la totalidad del contrato, de cuyo objeto pasarán a formar parte si fuesen incluidas en la proposición de quien resulte

adjudicatario (pág. 28, A.J.C. 94/2024); se ha atendido modificando en el sentido descrito el pliego definitivo.

- Precisar el contenido de la documentación no obligatoria que los licitadores pueden presentar con sus proposiciones (apartado 10 de la cláusula 1), ya que el concepto de “documentación que se considere precisa” empleado en el pliego es ambiguo (págs. 29 y 30, A.J.C. 94/2024); esta observación, planteada en términos similares en el informe jurídico A.J.C. 91/2024 respecto del pliego del contrato principal de obras, se ha atendido precisando en el pliego definitivo que la documentación a presentar sea la “necesaria para la evaluación de los criterios de valoración”.
- Valorar en qué medida la condición especial de ejecución relativa al seguimiento de la gestión preventiva en obra (apartado 19.3 de la cláusula 1), se superpone con la tarea de supervisar el desempeño de sus funciones por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra en el supuesto de que fuese necesario designarlo (pág. 30, A.J.C. 94/2024); esta observación se ha atendido perfilando en el pliego definitivo el alcance de la condición especial de ejecución tanto en el supuesto de que no exista coordinador, que se ha tomado como típico por razones lógicas, como en el supuesto, más común en la práctica, de que sea necesario designarlo; para ello se han tenido en consideración los razonamientos que seguidamente se indica. El primer supuesto es que, por no haber subcontratación en las obras del contrato principal CO/01/2024, la prevención de riesgos laborales competa por completo al contratista, de tal modo que las obligaciones legales de prevención de riesgos laborales del consorcio puedan llevarse a efecto a través del simple cumplimiento por el director facultativo de sus deberes públicos (y obligaciones contractuales en el pliego) de emitir informe al plan de seguridad y salud en el trabajo, adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a las obras y llevar el libro de incidencias para el control y seguimiento del plan de seguridad y salud (artículos 7.2 y 9.c, 9.f y 13 del Real Decreto 1627/1997, respectivamente); en este marco normal, el sentido de la condición especial de ejecución es que la dirección facultativa compruebe que en la ejecución de las obras que son objeto del contrato principal la gestión de la prevención de riesgos laborales por parte del contratista sea conforme a la ley puesto que, aun tratándose de una responsabilidad exclusiva del contratista de las obras, el consorcio tiene interés en supervisar la gestión que pueda realizar ese contratista para anticiparse a hipotéticas disfunciones de la prevención de riesgos laborales que pudieran tener efecto sobre la propia ejecución de las obras. Sin embargo, si el constructor decidiera subcontratar, el consorcio adquiriría entonces la obligación legal de designar a un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra para la realización de las amplias funciones preventivas y de coordinación de actividades empresariales que se mencionan en los restantes epígrafes del artículo 9 del Real Decreto 1627/1997, de cuya efectiva realización sería entonces responsable el consorcio en la condición legal que tiene de promotor de las obras; en este escenario, el sentido de la condición especial de ejecución no sería supervisar el adecuado desempeño de sus funciones por

el coordinador designado, pues para eso está prevista en el pliego definitivo (como solución ante una consideración esencial del informe de Abogacía) la correspondiente modificación del contrato, sino la misma finalidad de comprobar que la gestión de la prevención de riesgos laborales por parte del contratista de las obras del contrato principal sea conforme a la ley, pero ahora con un propósito diferente, cual es proteger los intereses del consorcio como promotor anticipándose a hipotéticas disfunciones de la prevención de riesgos laborales que lleve a cabo el constructor, pues además del papel principal de este en el desarrollo de los trabajos, no debe olvidarse que es la persona que ha de financiar las tareas del coordinador de seguridad y salud conforme al pliego de la contratación principal CO/01/2024. A results de esta observación, se ha revisado también la regulación de la condición especial de ejecución relativa al seguimiento de la gestión ambiental en obra (apartado 19.2 de la cláusula 1), con el mismo fin de depuración conceptual.

- Precisar el alcance de la penalidad leve por ejecución defectuosa del contrato de falta de colaboración con la Administración contratante (apartado 21 de la cláusula 1), para especificar si dentro de su ámbito de aplicación tendrán cabida otros supuestos diferentes de la falta de respuesta en plazo a un requerimiento de información sobre el objeto o ejecución del contrato que se identificaba *ad exemplum* en el pliego (pág. 31, A.J.C. 94/2024); se ha atendido suprimiendo en el pliego definitivo el concepto de falta de colaboración y precisando los concretos incumplimientos leves que subyacen al concepto.
- Determinar en el pliego (apartado 21 de la cláusula 1) un procedimiento sencillo para la tramitación de los expedientes de imposición de penalidades, garantizando en todo caso la audiencia al contratista (pág. 32, A.J.C. 94/2024); se ha atendido incluyendo en el pliego definitivo un sencillo procedimiento con las menciones mínimas necesarias para orientar la gestión y evitar errores: propuesta de resolución del responsable del contrato con sujeción a determinados criterios materiales, audiencia del contratista y resolución del órgano de contratación, remitiéndose en lo demás al procedimiento legalmente establecido (artículos 191 y 194.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y 97 a 99 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), pero no se ha establecido un mayor nivel de precisión porque se entiende que el diseño de un procedimiento específico completo, además de innecesario, plantearía el problema añadido de regular una cuestión de orden público, como es el procedimiento de emisión de los actos administrativos, mediante un instrumento convencional como es un documento contractual, en lugar de acudir a las fuentes del Derecho comunes, que en todo caso resultarían de aplicación imperativa con independencia de lo que el pliego pudiera establecer.
- Sustituir en la regulación de las modificaciones contractuales (apartado 22 de la cláusula 1) la expresión “artículos 203 a 205” por “artículos 203 y 205” (pág. 32, A.J.C. 94/2024); se ha hecho conforme a lo indicado.

III.) Igualmente, se han incorporado al pliego definitivo las siguientes observaciones autónomas de mejora del informe A.J.C. 124/2024:

- Indicar en la regulación del plazo de ejecución del contrato (apartado 18 de la cláusula 1), la fecha inicialmente prevista para el comienzo de su ejecución (págs. 6 y 15, A.J.C. 124/2024); para atender esta observación se ha trasladado a la regulación del plazo de ejecución, como sugiere el informe jurídico, la fecha de referencia, la cual constaba (con criterio sistemático más dudoso) en el apartado 4 de la cláusula 1 como justificación de la distribución en anualidades del presupuesto base de licitación.
- Revisar la regulación de la modificación contractual por integración en la dirección facultativa del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra (apartado 22.2 de la cláusula 1) para evitar la confusión que podría originarse en las potenciales licitadores al aludir a la par a la integración sin coste del coordinador en la dirección facultativa y al aumento del precio del contrato (pág. 21, A.J.C. 124/2024). El sentido de la mención a la integración sin coste del coordinador es indicar que el contratista de la dirección facultativa no tiene que pagar remuneración alguna a ese profesional, ya que de ello ha de encargarse el contratista de las obras CO/01/2024, que es quien con su voluntad de subcontratación obliga a que el consorcio deba designar coordinador; sin embargo, a la vista de las dudas puestas de manifiesto en el informe jurídico, se ha suprimido esta mención.

IV.) Las observaciones de mejora puestas de relieve en el informe preceptivo A.J.C. 94/2024 cuya atención no requiere modificar el pliego definitivo, sino ampliar la justificación de la memoria de la contratación, son las siguientes:

- Justificar específicamente por qué se exige como criterio de solvencia técnica la realización de dos trabajos similares en los últimos años y no solo uno, so pena de que pueda ser considerado un criterio indebidamente restrictivo de la competencia (págs. 20 y 21, A.J.C. 94/2024). Se amplía la justificación, que queda así:

«Justificación de los criterios de solvencia técnica o profesional: Se establece en el pliego con carácter principal el criterio de general aplicación previsto en el artículo 90.1 a) de la ley, por considerar que permite al órgano de contratación disponer de las garantías de ejecución del contrato que razonablemente ofrece la realización previa por parte del contratista de actuaciones similares con buen término en los últimos años. Se requiere la realización de un mínimo de dos trabajos porque proporciona una mayor garantía de que el contratista tenga una experiencia consistente y repetida en proyectos similares que si se requiriese solamente uno; llevar a buen término un solo proyecto puede ser una experiencia puntual, mientras que realizar dos proyectos demuestra una capacidad más consolidada y confiable. De otra parte, los proyectos de urbanización pueden variar significativamente en términos de complejidad, tamaño y desafíos específicos, por lo que, al requerir dos trabajos previos, se garantiza que el contratista haya tenido ocasión de enfrentarse a diferentes tipos de proyectos y problemas, lo que enriquece su capacidad de

gestionar situaciones diversas y complejas en el nuevo proyecto y conlleva reducir los riesgos de ineficiencias, errores y problemas de gestión que pudieran surgir de la falta de experiencia. Ambos matices son especialmente importantes debido al impacto directo sobre la ciudadanía y en el uso de recursos públicos que tiene la correcta ejecución de las obras, que demanda de la dirección facultativa la capacidad de hacer cumplir los plazos, de gestionar los recursos adecuadamente, de promover la calidad del trabajo que se realice y de solucionar problemas imprevistos. No obstante, en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 90.4 de la ley, se emplea para las empresas de nueva creación el criterio previsto en el artículo 90.1 b), por entender que permite disponer al menos de la garantía que ofrece la ejecución del contrato disponiendo de unos medios de organización técnica y de control de calidad determinados y revisables».

Posteriormente, en el informe facultativo se sugiere incorporar esta justificación a las memorias de la contratación (págs. 7 a 9, A.J.C. 124/2024), lo que se lleva a cabo incluyéndolas en este mismo acto, toda vez que su parte expositiva tiene la condición de documentación preparatoria del contrato y puede por tanto incluir contenido propio de la memoria de la contratación.

- Motivar con precisión el alcance del compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de los concretos medios personales que se demandan y las restricciones a la sustitución del personal designado (págs. 21 y 22, A.J.C. 94/2024). Para la atención de esta observación del informe preceptivo se amplió la justificación contenida en la memoria de la contratación, pero en el posterior informe facultativo se sugirió ampliar esa justificación para explicar en concreto que se requiera como experiencia unos determinados años de servicio y una cuantía mínima de obras en que hayan participado cada uno de los profesionales del equipo de trabajo (pág. 9 y 10, A.J.C. 124/2024). En consecuencia, se vuelve a ampliar la justificación, que en definitiva queda como sigue:

«Justificación de la exigencia de los medios adscritos: En términos generales, se justifica la exigencia específica de estos medios concretos, adicionales a los requisitos generales de solvencia, porque se consideran el equipo mínimo imprescindible para la diligente ejecución del contrato, habida cuenta de la complejidad y el grado de dificultad de las obras que constituyen el contrato principal y la exigencia legal de que las tareas más relevantes se lleven a cabo por personal que cuente con una habilitación profesional específica. La presencia de un equipo de dirección técnica complejo asegura un control riguroso de la calidad de los trabajos y materiales utilizados y de la seguridad en la obra, que no solo protege a los trabajadores, sino también a los usuarios de la infraestructura. Contar con estos tres roles clave promueve la transparencia y la rendición de cuentas en el proyecto; cada profesional tiene responsabilidades claras y definidas, lo que facilita el seguimiento y la evaluación del progreso del proyecto por parte de las autoridades y los interesados. Más en concreto, la adscripción al contrato de un director de obra y un director de ejecución de obra

permiten una gestión más eficiente y coordinada del proyecto; la división de responsabilidades y especialización de roles contribuye a una mejor planificación, seguimiento y resolución de incidencias, lo que redundará en una ejecución más fluida y menos propensa a errores. De otra, la adscripción de un supervisor de control de calidad minimiza el riesgo de defectos y fallos en la construcción, asegurando que cualquier problema se identifique y corrija de manera oportuna; esto reduce el riesgo de costosas reparaciones o ajustes futuros y garantiza la sostenibilidad del proyecto. Con la titulación y experiencia requeridas para estos facultativos se pretende asegurar una cualificación avanzada en la asunción de la máxima responsabilidad sobre la dirección facultativa o las responsabilidades superiores sobre el control de la ejecución y la supervisión del control de calidad de obras análogas, para garantizar así la competencia técnica, la calidad, la seguridad, la gestión eficiente, la reducción de riesgos y la transparencia de las actuaciones. Se requiere una amplia experiencia mínima en garantía de la correcta ejecución de las obras que han de ser objeto de dirección facultativa, la calidad de los materiales que se empleen y la seguridad de las instalaciones durante la ejecución. En concreto, la experiencia mínima de 7 años en redacción de proyectos y dirección de obras de urbanización que sumen 7.000.000 € de presupuesto, exigida para el director de obra, asegura que este profesional haya adquirido un conocimiento riguroso sobre la planificación, coordinación y supervisión general de proyectos de urbanización de importe relevante. Por su parte, la experiencia mínima de 5 años en dirección de obras de urbanización con 5.000.000 € de presupuesto, exigida para el director de ejecución de obra, asegura una competencia relevante en supervisar trabajos, gestionar equipos y recursos y resolver problemas operativos. Los mismos requisitos de experiencia, aplicados al supervisor de control de calidad, aseguran su competencia para evaluar la calidad conforme a normativa, identificar defectos y proponer correcciones.

Las restricciones a la sustitución del personal adscrito a la ejecución del contrato mientras se encuentren en ejecución las obras del contrato principal se justifican por considerar que la continuidad del personal inicialmente adscrito garantiza una gestión uniforme y consistente a lo largo de toda la ejecución del proyecto, mientras que los cambios de personas pueden interrumpir el flujo de trabajo y la comunicación, lo que puede resultar en retrasos y errores; por lo demás, es de prever que el equipo original establezca durante la ejecución de las obras relaciones de trabajo y canales de comunicación efectivos tanto internamente como con los contratistas, subcontratistas y otras partes interesadas, por lo que sustituir al personal de la dirección facultativa puede romper esas dinámicas y generar malentendidos y retrasos y, eventualmente, dar lugar a una pérdida de control sobre los altos estándares de calidad y seguridad demandados, aumentando el riesgo de fallos y accidentes».

- Mejorar la justificación de la utilización como criterio de adjudicación de la experiencia

del personal adscrito a la ejecución del contrato (apartado 9.2.B de la cláusula 1), ahondando en las razones por las que se estima conveniente una trayectoria tan dilatada como la prevista como máximo susceptible de oferta por parte de los licitadores, especialmente teniendo en cuenta la amplia experiencia que ya se exige como requisito adicional de solvencia de los profesionales adscritos (págs. 26 y 27, A.J.C. 94/2024). Sobre esta cuestión es preciso indicar preliminarmente que el informe de Abogacía parece partir de la premisa de que el pliego prevé que se valore como criterio de adjudicación una experiencia adicional de hasta 11 años en el director de obra, 8 en el director de ejecución y 7 en el supervisor del control de calidad (*«...una trayectoria previa tan dilatada como la prevista como máximo susceptible de oferta por parte de los licitadores en el criterio de adjudicación correspondiente (once años adicionales en el director de obra, ocho en el director de ejecución y siete igualmente suplementarios en cuanto al supervisor del control de calidad)»*), cuando la experiencia adicional máxima a valorar conforme al pliego se limita a 4, 3 y 2 años, respectivamente, si bien esa experiencia adicional corresponde efectivamente a una experiencia total para cada profesional coincidente con el número de años que se menciona en el informe jurídico debido a que el propio pliego exige como requisito adicional de solvencia una experiencia mínima de 7 años para el director de obra y 5 años para el director de ejecución y el supervisor del control de calidad. Sea como fuere, la observación del informe jurídico pone de relieve la conveniencia de motivar con precisión esta decisión debido a su efecto restrictivo sobre la concurrencia, por lo que se amplía la justificación:

«Justificación del criterio de valoración: la mayor experiencia del personal adscrito a la ejecución del contrato aumenta las posibilidades de enfrentarse correctamente a una mayor variedad de situaciones adversas no previstas en la obra, así como de optimizar la planificación de las tareas u ofrecer una mayor variedad de alternativas que ya hayan sido contrastadas anteriormente en otras obras. La presente obra implica la construcción de una infraestructura que incluye sistemas de tecnología, requisitos de seguridad y la coordinación de múltiples disciplinas. La naturaleza técnica del proyecto, que abarca desde la ingeniería civil hasta la integración de sistemas eléctricos y de otras instalaciones, requiere un conocimiento profundo y una capacidad de gestión probada en proyectos de similar envergadura. Por tanto, aun cuando se limite la valoración de la experiencia a un máximo de años, a fin de no mermar el principio de libre concurrencia, la experiencia máxima valorable es muy amplia porque se entiende que puede mejorar la correcta ejecución del proyecto, la calidad de los materiales y la seguridad de las instalaciones. En concreto, la experiencia máxima valorable de hasta 4 años sobre el mínimo de 7 años exigido como requisito de solvencia adicional para el director de obra, no se alcanza hasta que este profesional acumule una experiencia total superior a 11 años, experiencia senior que asegura que este profesional haya adquirido un conocimiento profundo y amplio en la planificación, coordinación y supervisión general de proyectos de urbanización al haber gestionado múltiples proyectos, cada uno con sus propios desafíos y soluciones, lo que fortalece su

capacidad para anticipar problemas y encontrar soluciones efectivas; además, con más de una década de experiencia, es de prever que el director de obra haya desarrollado fuertes habilidades de liderazgo y toma de decisiones críticas que pueden ser decisivas para dirigir el equipo de dirección facultativa de manera efectiva y asegurar que el proyecto avance según lo planificado. Por su parte, la experiencia máxima valorable de hasta 3 años sobre el mínimo de 5 años requerido como solvencia del director de ejecución de obra no se alcanza hasta que acumule una experiencia total superior a 8 años, siendo de prever que con ella haya adquirido una sólida competencia técnica y operativa en la supervisión diaria de los trabajos, la gestión de equipos y recursos y la resolución de problemas operativos, así como el know-how necesario para implementar los planes del proyecto de manera eficiente y asegurar que se cumplan las especificaciones técnicas y los estándares de calidad. Finalmente, la experiencia máxima valorable de hasta 2 años adicionales al mínimo de 5 años requerido como solvencia del supervisor de control de calidad se alcanza con una experiencia total superior a 7 años, con la que es de prever que este profesional no solo esté bien versado en las normativas y estándares de calidad aplicables, sino que aplique protocolos útiles para verificar que todos los materiales y trabajos cumplan con los requisitos exigidos, evaluar con precisión y eficacia la calidad del trabajo e identificar defectos y proponer correcciones antes de que se conviertan en problemas mayores».

V.) Por otra parte, no se han atendido las siguientes observaciones contenidas en el informe preceptivo A.J.C. 94/2024 porque se estima que no supondrían una mejora del pliego, debido a las circunstancias que para cada caso se expresan:

- Revisar la nomenclatura CPV de las prestaciones contractuales (apartado 1.V de la cláusula 1, actual apartado 1.IV), bien para incluir junto al código de supervisión del trabajo de construcción que constituye el objeto de la prestación principal (categoría 71247000-1), el correspondiente específicamente a los servicios de salud y seguridad (subcategoría 71317200-5, que está incluida en la categoría 71317000-3, servicios de consultoría en protección y control de riesgos), o bien para indicar únicamente como nivel de clasificación común a todas las prestaciones la división 71, servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección (pág. 12, A.J.C. 94/2024). Esta observación, por lo que se refiere a la identificación del objeto contractual al nivel de división (dos dígitos) en la nomenclatura CPV (división 71), no se ha atendido por considerar que, si bien tendría la ventaja de abarcar con un solo código tanto prestaciones de supervisión de la construcción cuanto de consultoría en protección y control de riesgos, tendría el inconveniente de que ese código sería demasiado genérico para desplegar efectos jurídicos concretos, siendo aconsejable que el nivel mínimo de desagregación que se emplee en el pliego de la contratación sea el grupo (tres dígitos) porque es el que se utiliza en la Ley de Contratos del Sector Público para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato a efectos de solvencia técnica o profesional (artículo 90.1.a, párrafo 2º), que es el criterio que el pliego incorpora como requisito normal de esa clase de solvencia

(apartado 7.B.1, párrafo 2º, de la cláusula 1). En cuanto a la sugerencia de desagregar en códigos separados las prestaciones de supervisión del trabajo de construcción (categoría 71247000-1) y los servicios de salud y seguridad (subcategoría 71317200-5), no se ha atendido porque se entiende que la consultoría de riesgos es una prestación significativamente distinta de la supervisión de la construcción y por ese motivo el grupo CPV respectivo (tres dígitos) es diferente, de tal manera que la desagregación propuesta en el informe jurídico plantearía el inconveniente de dejar en la indefinición una cuestión siempre delicada en un contrato de dirección de obras, cual es determinar si las prestaciones encajan en los servicios de arquitectura y conexos del grupo 712 (que incluyen también servicios de ingeniería en algunas circunstancias), o son privativas de los servicios exclusivos de ingeniería del grupo 713. Por otra parte, es de considerar también que las prestaciones contractuales en ningún caso van a incluir la coordinación de la seguridad y salud en obra, sino solamente la supervisión del adecuado desempeño de sus funciones por parte del coordinador si hubiese necesidad de designarlo, lo que implica que la prestación nunca va a ser una consultoría de riesgos laborales, sino, a lo sumo, la supervisión de esa consultoría, prestación que encaja con naturalidad como función tanto de arquitectura como de ingeniería en la codificación que se ha empleado en el pliego para identificar el objeto del contrato: grupo 712 (servicios de arquitectura y servicios conexos), clase 7124 (servicios de arquitectura, ingeniería y planificación), categoría 71247 (supervisión del trabajo de construcción). Además, para mayor precisión, se ha extendido la codificación CPV al vocabulario suplementario, con la finalidad de completar la identificación de las prestaciones mediante la indicación de que su naturaleza es en todo caso la supervisión del trabajo ajeno (subdivisión DA40-1, control de calidad).

Con esta explicación se atiende también a la sugerencia contenida en ambos informes para que se justifique la concreta elección de una única codificación CPV del objeto del contrato aun cuando hubiese otros que, en principio, también se podrían adaptar a las prestaciones contractuales (pág. 12, A.J.C. 94/2024; pág. 4, A.J.C. 124/2024). Esta justificación no se incorpora al pliego de la contratación porque se entiende que es propia de la documentación preparatoria del contrato.

- Suprimir en la codificación del objeto del contrato (apartado 1.V de la cláusula 1, actual apartado 1.IV) las referencias a la clasificación nacional de actividades económicas (CNAE-2009), la nomenclatura estadística de actividades económicas en la Unión Europea (NACE, Rev. 2), la clasificación estadística de productos por actividades en la Unión Europea (CPA 2.1), el código normalizado de productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) y la clasificación estadística de productos por naturaleza de las Naciones Unidas (CPC 2.1), por considerar que el pliego, en el apartado dedicado a la determinación del objeto del contrato, debería limitarse a incluir exclusivamente el código CPV pertinente, resultando contraproducente referir su equivalencia con otras nomenclaturas alternativas, sin perjuicio de que pueda ser incluida en la documentación preparatoria del contrato a efectos explicativos o comparativos (pág. 14, A.J.C. 94/2024). Esta observación, que ya se planteó en términos similares en el informe

jurídico A.J.C. 91/2024 en relación con el pliego del contrato principal de obras CO/01/2024, no se ha atendido por considerar que la inclusión de estas clasificaciones estadísticas adicionales no es contraproducente, sino que tienen efectos favorables a los intereses del consorcio puesto que, sin afectar al principio de seguridad jurídica, que se mantiene incólume desde el momento en que el pliego incluye también con la debida separación el código CPV sin dar lugar a equívoco o confusión con otras codificaciones, tiene la ventaja de que mejora de forma importante la efectividad del principio de transparencia y, con ello potencia la libre competencia y la consiguiente selección de la oferta económicamente más ventajosa. Por otra parte, la solución que sugiere el informe de Abogacía General, limitar la referencia a esas nomenclaturas alternativas en la memoria de la contratación, tendría el inconveniente de que algunas de estas clasificaciones tienen relevancia jurídica propia, como la clasificación NACE, Rev. 2, que la Ley de Contratos del Sector Público emplea para definir el objeto de los contratos de obras (artículo 13.1.a en relación con el anexo I), mientras que la misma ley acude a las clasificaciones CNAE, UNSPSC y CPC para determinar la equivalencia de prestaciones similares en los contratos de servicios y suministros a efectos de solvencia técnica (artículos 90.1.a y 89.1.a, respectivamente), lo que aconseja incorporarlas a un documento contractual, como es el pliego de cláusulas administrativas particulares, en lugar de limitarlas a la documentación preparatoria del contrato.

- Precisar el alcance concreto de las condiciones especiales de ejecución relativas al seguimiento de la gestión ambiental y de la gestión preventiva en obra (números 2 y 3 del apartado 19 de la cláusula 1), ya que las consecuencias que para el contratista podría tener su incumplimiento (resolución del contrato) son muy graves (pág. 30, A.J.C. 94/2024). Esta observación no se ha atendido porque se entiende que, más allá de las consecuencias de su incumplimiento, las cuales devienen, como se indica en el pliego, no de una decisión autónoma del consorcio, sino de su sujeción voluntaria a unas instrucciones de gestión propias de la Administración de adscripción, ambas condiciones están descritas con la suficiente precisión en el pliego, en el que se indica pormenorizadamente la documentación que habrá de ser presentada para acreditar el cumplimiento de cada una de estas condiciones especiales de ejecución y el tiempo de cumplimiento de la obligación. No obstante, se ha perfilado la redacción de la cláusula por los motivos indicados en el epígrafe II) anterior en relación con las observaciones de mejora que sí han sido incorporadas al pliego definitivo.
- Tomar en consideración en la descripción de las penalidades en el pliego (apartado 21 de la cláusula 1) el eventual incumplimiento como compromiso no esencial adquirido en la oferta de la experiencia adicional del equipo de trabajo (pág. 31, A.J.C. 94/2024). Esta observación no se ha atendido porque el criterio de valoración referente a la experiencia adicional del equipo de trabajo no constituye un compromiso del licitador, sino un dato objetivo del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, cuya veracidad se acredita, conforme a lo dispuesto con carácter general, al tiempo de acreditar la capacidad para contratar (cláusula 15.8 del pliego), de tal modo que, una vez averada la experiencia por la mesa de contratación, no cabe incumplir lo declarado

en la oferta salvo que se modifique la composición del equipo de trabajo adscrito, para lo que el pliego ya contiene las cautelas necesarias. En resumen, se considera que el incumplimiento de la experiencia ofertada para el equipo de trabajo no puede ser objeto de penalidad como incumplimiento de un compromiso no esencial adquirido en la oferta.

VI.) Asimismo, no se han atendido dos observaciones autónomas del informe facultativo A.J.C. 124/2024:

- Determinar en la regulación del plazo de ejecución del contrato (apartado 18 de la cláusula 1) las prórrogas previstas y su duración (pág. 15, A.J.C. 124/2024). Esta observación no se ha atendido porque actualmente no hay previsión de prórroga contractual alguna, ya que, si bien en la versión inicial del pliego se planteó la posibilidad de prorrogar el contrato de dirección facultativa en el caso de que el contratista constructor de las obras hubiera ampliado el plazo de garantía de las obras, a la vista de las observaciones del informe preceptivo A.J.C. 94/2024 se ha considerado el supuesto como de modificación contractual.
- Trasladar la regulación de las modificaciones contractuales por ampliación del plazo de garantía, variación de plazo de ejecución, modificación y suspensión del contrato principal de obras (apartados 22.1, 22.3, 22.5 y 22.6 de la cláusula 1), a la regulación del plazo de ejecución del contrato (pág. 23, A.J.C. 124/2024). Esta observación no se ha atendido porque se ha considerado preferible tratar estas incidencias como modificaciones contractuales previstas, ya que se entiende que es un sistema más sencillo y fácil de comprender que si se plantean como meras alteraciones del plazo de ejecución con efecto añadido de modificación adicional de otras prestaciones contractuales, habida cuenta además que, según se indica en el propio informe, “en alguna ocasión, se ha planteado la modificación del contrato para ajustar su plazo a la duración del contrato principal, sin haber dado lugar a una oposición doctrinal insalvable”.

VII.) Finalmente, se ha incorporado de oficio al pliego definitivo una observación de mejora puesta de relieve en el informe A.J.C. 91/2024 relativa al pliego del contrato principal de obras CO/01/2024, que se ha entendido aplicable al pliego del contrato complementario de servicios CS/01/2024, cual es eliminar del pliego la justificación de la clasificación y de los criterios de solvencia (apartado 8 de la cláusula 1), al tratarse de cuestiones propias de la documentación preparatoria del contrato, lo que resulta extensible a los demás apartados en que se advierta contenido de índole justificativa o aclaratoria (pág. 18, A.J.C. 91/2024); se ha atendido suprimiendo del apartado 8 de la cláusula 1, todas las justificaciones que ya constan con el mismo contenido en el acuerdo de incoación del procedimiento de contratación, e incluyendo en este acto (*cf. supra IV*) las referentes a las cuestiones que han variado en la versión definitiva del pliego.

Igualmente, a resultas de la atención de las consideraciones esenciales del informe preceptivo A.J.C. 94/2024 relativas a la configuración contractual de la tarea eventual de supervisar el correcto cumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos laborales por

parte del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de las obras del contrato principal CO/01/2024 y sobre la prórroga prevista para el caso de que el contratista de las obras hubiera ofertado ampliar el plazo de garantía de su contrato (*cf. supra I, 1ª y 2ª*), se ha considerado conveniente, además de dar el tratamiento de modificación contractual a estos dos supuestos de tareas eventuales, prever también en el pliego otros supuestos de modificación del contrato de dirección facultativa en función de las incidencias más comunes que se puedan presentar durante la ejecución de las obras (variaciones de plazos, suspensiones, modificaciones, etc.) Este planteamiento ha sido avalado en el informe facultativo A.J.C. 124/2024, en el que únicamente se sugiere revisar la ubicación sistemática de las modificaciones por ampliación de garantía, variación de plazo de ejecución, modificación propiamente dicha y suspensión del contrato principal de obras (*cf. supra VI, 2ª*).

Por último, se ha actualizado en el pliego la previsión de financiación por años de las obligaciones económicas del consorcio dimanantes de la contratación, para adaptarlas a la previsión de inicio de la ejecución del contrato el día 1 de diciembre de 2024.

5. TÍTULO COMPETENCIAL:

Una vez que ha concluido la instrucción del procedimiento de contratación de los servicios de dirección facultativa y supervisión del control de calidad de las obras de reparación y terminación de la urbanización del parque científico y tecnológico Tecnogetafe, procede la emisión de una resolución por la que se aprueben los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, el expediente de contratación y la autorización del gasto, y se disponga la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato.

La potestad de aprobar los pliegos tanto de cláusulas administrativas particulares cuanto de prescripciones técnicas particulares de la contratación corresponde al órgano de contratación conforme a los artículos 122.5 y 124 de la Ley de Contratos del Sector Público, respectivamente, siendo igualmente de la competencia del órgano de contratación la aprobación del expediente, que en el presente caso implica la aprobación de la fase de autorización del proceso de gasto, así como la apertura del procedimiento de adjudicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.1 de la misma ley.

El órgano de contratación del Consorcio Urbanístico Área Tecnológica del Sur es el consejo de administración, a resultas de la atribución en el epígrafe h) del artículo 8.2 de los estatutos de la facultad de adjudicar cuantos contratos sean precisos para el cumplimiento de los fines del consorcio. Compete igualmente al consejo de administración aprobar la autorización del gasto en ejercicio de la facultad de aprobar gastos que se le atribuye en el epígrafe d) del propio artículo 8.2 de los estatutos.

De conformidad con lo expuesto, el Consejo de Administración, a propuesta de la directora-gerente, por unanimidad de los miembros presentes y representados, adopta el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir la contratación por el Consorcio Urbanístico Área Tecnológica del Sur de los servicios de dirección facultativa y supervisión del control de calidad de las obras de reparación y terminación de la urbanización del parque científico y tecnológico Tecnogetafe.

SEGUNDO. Aprobar el pliego de prescripciones técnicas particulares que han de regir la realización para el Consorcio Urbanístico Área Tecnológica del Sur de los servicios de dirección facultativa y supervisión del control de calidad de las obras de reparación y terminación de la urbanización del parque científico y tecnológico Tecnogetafe.

TERCERO. Aprobar el expediente CS/01/2024, de contratación pública administrativa típica de los servicios de dirección facultativa y supervisión del control de calidad de las obras de reparación y terminación de la urbanización del parque científico y tecnológico Tecnogetafe.

CUARTO. Aprobar la autorización de un gasto por importe de ochenta y dos mil cuatrocientos noventa y seis euros con cuarenta y nueve céntimos (82.496,49 €), Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, destinado a financiar las obligaciones económicas que resulten para el Consorcio Urbanístico Área Tecnológica del Sur de la contratación de los servicios de dirección facultativa y supervisión del control de calidad de las obras de reparación y terminación de la urbanización del parque científico y tecnológico Tecnogetafe, conforme a la siguiente distribución por anualidades:

- Año 2024: 7.424,68 €
- Año 2025: 66.822,14 €
- Año 2026: 8.249,65 €

QUINTO. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de servicios de dirección facultativa y supervisión del control de calidad de las obras de reparación y terminación de la urbanización del parque científico y tecnológico Tecnogetafe, expediente CS/01/2024, concediéndose plazo para la presentación de ofertas no inferior a quince días naturales.

Y para que así conste, expido la presente certificación, con anterioridad a la aprobación del acta de la sesión, con el Vº Bº del Presidente, en Madrid, a fecha de firma.

Vº Bº**EL PRESIDENTE****LA SECRETARIA**